

**INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA FORMA EN QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EJERCE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA, TRATÁNDOSE DE DELITOS TRIBUTARIOS.**

---

**BOLETÍN N° 9.954-05-1**

**HONORABLE CÁMARA:**

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, viene en informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de la referencia, originado en una moción del diputado Tarud, don Jorge y del ex diputado Insunza, don Jorge e informado por la Comisión de Hacienda.

Durante el análisis de esta iniciativa la Comisión contó con la colaboración del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, del director de la Unidad en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO), de dicha institución, señor Mauricio Fernández; del Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza, de la jefa de gabinete del Director, señora Elena Amaya y del subdirector jurídico de esa repartición, señor Bernardo Lara.

**CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.**

**1) La idea matriz o fundamental del proyecto** consiste en establecer la forma en que el Ministerio Público ejerce la acción penal pública, tratándose de delitos tributarios.

**2) Normas de carácter orgánico constitucional.**

Cabe señalar que la Comisión de Hacienda calificó como orgánico constitucional el artículo único del proyecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la Carta Fundamental, norma que establece que una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público.

Sin perjuicio de ello, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, no compartió dicho criterio en atención a las siguientes consideraciones:

Efectivamente, el artículo 1° de la ley orgánica constitucional del Ministerio Público señala que: "El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso,

ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. No podrá ejercer funciones jurisdiccionales.”.

Por otra parte, en el caso de los delitos tributarios, el artículo 162 del Código Tributario establece la forma del ejercicio de la acción penal pública, por parte del Ministerio Público, consistente en que las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querrela del Servicio. Con todo, la querrela podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado, a requerimiento del Director.

El proyecto en informe no altera para nada la facultad genérica del Ministerio Público para ejercer acción penal pública, contemplada en la Constitución y en su ley orgánica, ya que la remisión al artículo 162 del Código Tributario es, precisamente, a una de las formas previstas en la ley, contemplada en un cuerpo legal que no reviste, en esta materia el rango de norma orgánica constitucional.

Reafirma esto lo señalado por el Tribunal Constitucional en el considerando 42° de su sentencia pronunciada en la causa rol N°3130-16, de 9 de agosto de 2016, que en lo medular dispone: “...También porque conforme al artículo 83 de la Constitución, la acción penal pública la ejerce el Ministerio Público “en la forma prevista por la ley”. Cuando la Constitución no califica el tipo de ley, se entiende que es ley simple (STC 260/1997). Ello es consistente con que las materias de procedimiento son materias de ley simple (artículo 63, N° 3, Constitución). Además, conforme al artículo 53, la acción pública es ejercida de oficio por el Ministerio Público, siempre que “no esté sometida a regla especial”. Finalmente, el artículo 166 del Código Procesal Penal no ha sido considerado por esta Magistratura como propio de ley orgánica constitucional.”.

El texto propuesto por el proyecto de ley sólo tendría este carácter si alterara, de algún modo el artículo 1° de la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, lo que en la esencia no ocurre.

**3) Normas de quórum calificado.**

No hay.

**4) Requiere trámite de Hacienda.**

No.

**5) Se designó Diputado Informante al señor Chahin, don Fuad.**

## **I.- ANTECEDENTES GENERALES.**

### **1.- Objetivos del proyecto.**

La moción expresa las siguientes consideraciones:

Que de acuerdo al artículo 83 de la Constitución Política de la República “Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.”

Que, por su parte, el artículo 1° de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece que “El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley.”

Subraya que esta disposición de la ley orgánica le otorga al Ministerio Público la “función” de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos punibles y en su caso “ejercer la acción penal pública” en la forma prevista por la ley.

Que el artículo 162 del Código Tributario prescribe, por su parte, en su inciso primero que: “Las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querrela del Servicio. Con todo, la querrela podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado, a requerimiento del Director.”.

Que, por su parte, en los incisos sexto y séptimo del mismo artículo prescribe que: “El Ministerio Público informará al Servicio, a la brevedad posible, los antecedentes de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes y que pudieren relacionarse con los delitos a que se refiere el inciso primero.”.

Que si no se hubieren proporcionado los antecedentes sobre alguno de esos delitos, el Servicio los solicitará al fiscal que tuviere a su cargo el caso, con la sola finalidad de decidir si presentará denuncia o interpondrá querrela, o si requerirá que lo haga al Consejo de Defensa del Estado. De rechazarse la solicitud, el Servicio podrá ocurrir ante el respectivo juez de garantía, quien decidirá la cuestión mediante resolución fundada.

Que fruto de la observación de las disposiciones mencionadas, el ejercicio de la acción penal en los delitos tributarios corresponde exclusivamente al Servicio de Impuestos Internos, salvo excepción en que puede

presentarse una querrela por el Consejo de Defensa del Estado pero sólo a requerimiento del Director del Servicio de Impuestos Internos, con lo cual se viene a confirmar la exclusividad de este Servicio en el ejercicio de la acción penal en los delitos tributarios.

Que siendo los delitos tributarios de aquellos que afectan seriamente la fe pública y el patrimonio fiscal, no se comprende el por qué el ejercicio de la acción penal corresponde sólo al Servicio de Impuestos Internos y no también al Ministerio Público, organismo autónomo reglado por la Constitución y su ley Orgánica que tiene como función la de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito y ejercer la acción penal pública en su caso.

Que, en los últimos días, a propósito de las investigaciones que lleva a efecto el Ministerio Público sobre grandes contribuyentes imputados por la comisión de delitos tributarios, la opinión pública ha podido observar cierta tensión entre los servicios mencionados en razón de que el Servicio de Impuestos Internos no habría ampliado sus denuncias ni entregado antecedentes sobre otras variables que han aparecido a partir de la investigación que desarrolla la Fiscalía, con lo cual, a fin de evitar las suspicacias y suposiciones que surgen a propósito de este tipo de tensiones, surge la necesidad de ampliar las funciones que le otorga la Constitución y su ley orgánica al Ministerio Público a la investigación y al ejercicio de la acción pública, cuando proceda, respecto de delitos tributarios de que tomare conocimiento como producto de sus investigaciones.

Consideran que en el caso del presente proyecto no se están determinando funciones o atribuciones del Ministerio Público puesto que las funciones y atribuciones para investigar los hechos constitutivos de delito y de ejercer la acción pública en su caso ya le han sido entregadas por la Constitución Política y la Ley Orgánica que rige a este Servicio.

## 2.- Contenido de la moción.

El proyecto consta de un artículo único que modifica el artículo 162 del Código Tributario, de la siguiente manera:

a) En el inciso primero elimina la palabra “sólo”. De esta manera el SII pierde la exclusividad para presentar querellas o denuncias para investigar hechos constitutivos de delitos tributarios

b) Agrega el siguiente inciso segundo nuevo:

“El Ministerio Público podrá investigar y ejercer la acción pública por los delitos tributarios de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones que realizare.”.

Esta modificación extiende la facultad del ese organismo para ejercer la acción penal pública a los delitos tributarios.

c) Elimina el inciso sexto.

La norma eliminada establece que el Ministerio Público informará al SII, a la brevedad posible, los antecedentes de que tomare conocimiento con ocasión de la investigación de delitos comunes y que pudieren relacionarse con delitos tributarios.

d) Sustitúyase el inciso séptimo por el siguiente:

“El Servicio de Impuestos Internos podrá solicitar los antecedentes respecto a delitos tributarios al fiscal que tuviere a cargo la investigación, con la sola finalidad de decidir si ejercerá las atribuciones que le otorga el inciso primero del presente artículo.”.

El inciso séptimo sustituido faculta al SII para solicitar al Ministerio Público los antecedentes sobre delitos tributarios no proporcionados por el organismo autónomo, para decidir si presentará denuncia o querrela directamente o recurrirá al Consejo de Defensa del Estado. Asimismo, ante negativa del Ministerio Público el SII podrá ocurrir ante el juez de garantía quien decidirá la cuestión por resolución fundada.

## **II. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS.**

### **1.- Debate previo.**

**El Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott,** <sup>1</sup> señaló que para el Ministerio Público, el proyecto de ley en tramitación, satisface las expectativas de la institución, cuestión que viene reclamando hace un tiempo, y que dice relación con la necesidad que el Ministerio Público, como órgano autónomo, tenga la facultad para ejercer la acción penal en toda clase de delitos.

Esto se planteó al momento de legislar sobre la colusión, también sobre las facultades del Servicio Electoral y, ahora, sobre el artículo 162 del Código Tributario, pues la cuestión es la necesidad de una igualdad ante la justicia penal. No pueden existir situaciones de privilegio de personas que incurrir en conductas ilícitas, como infractoras de ciertos bienes jurídicos de magnitud principal, cuya infracción trae aparejada la aplicación de una pena. Si la infracción de esas normas trae aparejado una pena, no se ve razón porque otros órganos distintos tengan iniciativa exclusiva en esos temas.

Esto persigue una coherencia en el sistema penal, pues de lo contrario se perciben como sectores privilegiados, pues pueden no ser objeto de una sanción penal a través del pago de una multa, y esto favorece a sectores más acomodados de nuestra población. Hay un reclamo de la sociedad sobre la igualdad, las personas que incurrir en conductas que son constitutivas de delitos deben ser tratadas con el mismo parámetro.

---

<sup>1</sup> Minuta disponible en <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=102465&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>.

Hay un reclamo por la discriminación arbitraria que se produce por no tener un igual tratamiento respecto de las personas respecto a sus propias conductas. Y uno lo puede ejemplificar, se ha hecho en más de una oportunidad, que se castigue un portonazo, que se apliquen sanciones severas, se ha legislado en implementar la penalidad de ese tipo de delitos, de aplicar modificaciones en la responsabilidad penal, pero quienes incurrir en delitos que afectan a bienes jurídicos similares, como la apropiación de dineros que deberían estar en el erario nacional tratándose de delitos tributarios, o en el bolsillo de los consumidores en el caso de la colusión, tienen un tratamiento distinto y dependen de la decisión de un órgano administrativo y no autónomo como el Ministerio Público, que tiene más libertad para tomar sus resoluciones y para aplicar principios coherentes del sistema en su conjunto.

No puede ser que se apliquen 10 años a quien comete un portonazo, y no a quien compró un vehículo y no ha pagado sus impuestos.

En abril de 2016 manifestó lo mismo, esto es la necesidad que el Ministerio Público tuviera la posibilidad de accionar en esta materia y desarrollar las investigaciones sin la denuncia previa o querrela. Se han enviado diversos oficios a la Cámara de Diputados y el Senado, en 2015, el oficio 433, el 2016 el N°13, todos coincidentes en el mismo sentido.

Se indica como debilidad del Ministerio Público el no tener el expertiz necesario para hacer investigaciones de esta naturaleza, que tendrían una complejidad que los fiscales no podrían investigar. Pero ello hace abstracción de la posibilidad del actuar conjunto que se espera de los otros órganos del Estado, que es lo que hoy ocurre con la Superintendencia de Valores y Seguros, donde se actúa coordinadamente en investigaciones para definir infracciones al mercado de valores, pues ahí también ocurren situaciones delictuales. Lo mismo ocurre con la Contraloría General de la República, se trabaja conjuntamente con ellos.

Entienden que sus falencias o debilidades en materia de experiencia o expertiz en estos temas, se resuelven trabajando con los servicios respectivos, pero además se tiene una unidad nacional con 15 años de experiencia en temas de alta complejidad, se tiene fiscales especializados, algunos provenientes del mismo Servicio de Impuestos Internos, y se tiene la facultad legal para requerir información de otros servicios que sus funcionarios se desempeñen en el Ministerio Público para el desarrollo de estas investigaciones.

En definitiva, se altera seriamente la igualdad en el tratamiento ante la justicia penal con la existencia de este tipo de impedimentos o trabas para el ejercicio pleno de la acción del Ministerio Público para asegurar así la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, cuestión que no ocurre cuando depende de un órgano administrativo y no del órgano autónomo constitucional para ejercer las acciones.

Creían además que las investigaciones que se han desarrollado en el último tiempo, han hecho posible cambiar las conductas de los

ciudadanos. Hoy la situación tributaria es bastante distinta a la previa a la investigación de los casos Penta y Soquimich, las prácticas que quedaron en evidencia, hoy los empresarios lo pensarán varias veces antes de incurrir en las mismas, pues pueden traer aparejada la sanción proyectada.

En consecuencia, la discusión penal más que administrar las infracciones en materia tributaria, inhibe la realización de conductas. Cuando no existen limitaciones de esta naturaleza, y existe el riesgo cierto de ser objeto de persecución penal, es una posición bastante más disuasiva que el caso tributario, de los contribuyentes, que la eventual sanción que va a depender de una decisión de orden administrativa, que se ha explicitado.

Ese es su basamento, el reclamo por la igualdad ante la ley que le parecía particularmente grave, se requiere coherencia con todos los ciudadanos que incurrir en conductas infractoras de la ley penal, y no solo de las personas que carecen de recursos.

Cuando se discutió la reforma procesal penal, una de las cuestiones a resolver era que el Ministerio Público no fuera una máquina de moler carne, pero la igualdad ante la ley impide que haya sectores privilegiados en sectores tributarios, monopólicos, o temas electorales.

**El Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza,**<sup>2</sup> señaló que para analizar debidamente el debate, se requiere mucha información.

Tal vez, lo primero que se debe abordar son las razones por las cuales una moción que ya había sido presentada hace dos años, cobraba nuevamente relevancia y los convocaba a esta sesión. En ese sentido, parte de la exposición sería hacerse cargo sobre que el Servicio de Impuestos Internos estaría haciendo un uso arbitrario de la norma que le otorga la exclusividad para accionar penalmente en el caso de delitos tributarios, y necesariamente se debe abordar la contingencia.

Y la contingencia señala que se ha estado enfrentando casos que han sido de connotación pública, y que han estado asociados al financiamiento irregular de la política, y necesariamente, es relevante que nosotros abordemos, nos hagamos cargo de esos juicios, pues son mitos instalados equivocadamente.

Si bien la reserva del artículo 35 del Código Tributario le impide referirse a los casos individualmente, como se sabe, hoy existen dos casos en que el Servicio se ha querellado en el uso de sus facultades, activó la acción penal, y esa es la estadística.

Denuncias	3	2
-----------	---	---

<sup>2</sup> Disponible en <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=102156&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>.

Querellas	16	18
Sanciones Pecuniarias	4	4
Número de Querellados	69	62
Documentos Tributarios	2.205	1.495
Número de Emisores	149	253
<b>PERJUICIO FISCAL</b>	<b>\$ 4.081.250.848</b>	<b>\$ 3.239.280.459</b>

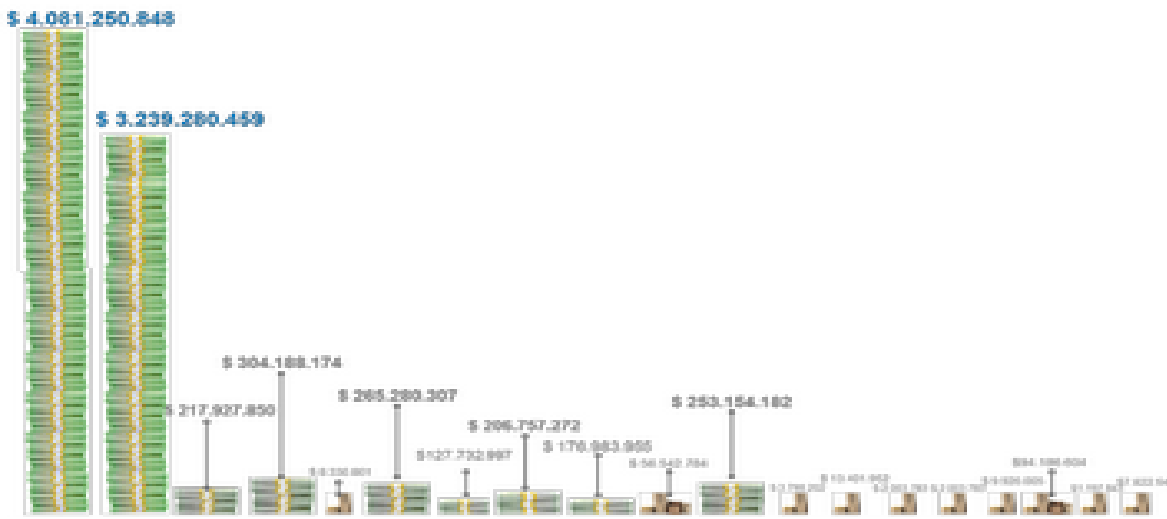
En un caso, el Servicio presentó tres denuncias, y en el otro, dos. Luego, respecto a las querellas, se ingresaron 16 y en el otro, 18. En cuanto a las sanciones pecuniarias, hay 4 actas de denuncia, y en el otro, también 4. Respecto al número de querellados, en uno hay 69 y en el otro, 62. Si se ven los documentos tributarios falsos involucrados, hay 2.205 y en el otro, 1.495. Finalmente, en cuanto a los emisores, 149 y 253.

Un dato relevante considerado al momento de aplicar los criterios para ver uno y otro y la decisión de activar la acción penal, es que en uno supera los \$4MMM y el otro, \$3MMM.

Se ha dicho que el Servicio ha hecho diferencias y ha cargado más la mano en un sector que otro. Pero las acciones penales adoptadas son bastante equitativas, equivalentes, son casos de alto monto, donde el ejercicio de la acción penal de manera coincidente se ha hecho según tal facultad. Así, se derrumba uno de los mitos en cuanto al tema de las querellas.

Se ha planteado que a pesar de la sanción pecuniaria, en otros casos similares no se ha tomado la decisión de ejercer la acción penal. Desmitificó ese juicio, pues como se exhibe en la lámina 2, en las dos primeras barras se ha asociado al perjuicio fiscal el monto fiscal involucrado (\$4MMM y \$3MMM), mientras para el resto de las empresas, donde se definió activar la sanción pecuniaria, son del orden de \$200 y \$300 millones.

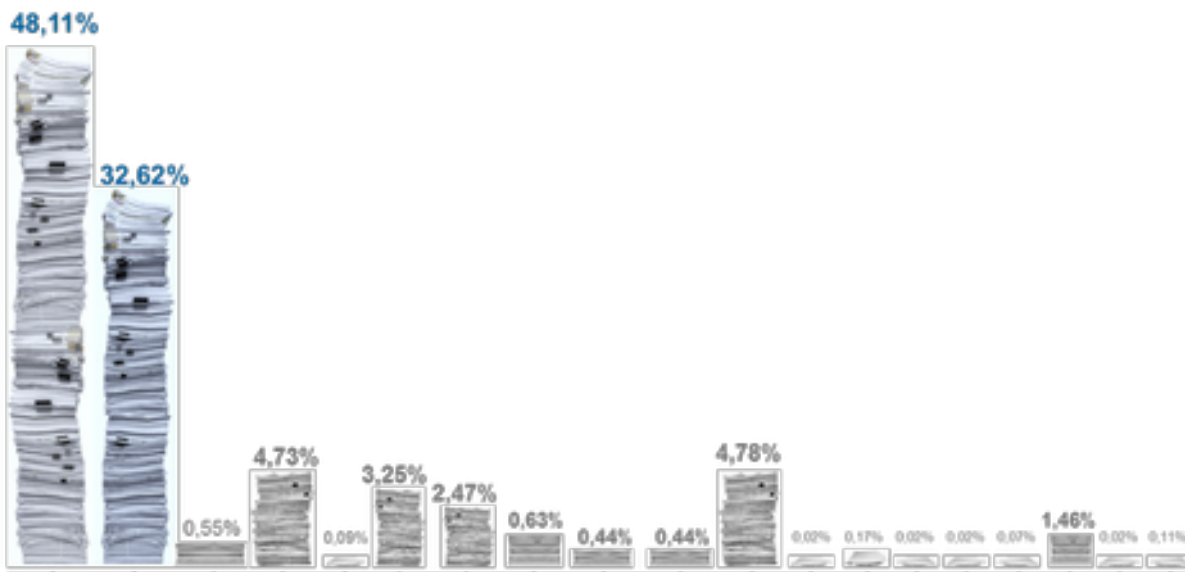
Lámina 2



Son comparativamente situaciones muy diferentes. Las diversas empresas involucradas, la empresa cuyo perjuicio fiscal es mayor no alcanza al 10% de una de las empresas querelladas, esos son parte de los criterios técnicos para definir si se activa una querrela o una sanción pecuniaria.

De eso se trata la facultad, la facultad es discrecional, pero no se estaba haciendo un uso arbitrario, es un uso racional basado en los criterios que públicamente se han definido para cumplir la misión.

LAMINA 3, documentos tributarios falsos utilizados irregularmente



Al ver el número de documentos ideológicamente falsos en los diversos casos, las cifras también son muy distintas. Se habla que prácticamente los dos tercios de los documentos fueron ocupados por los querellados, mientras que en el resto son mucho menores. No se obvia el dolo, aquí si hubo delito tributario, y por ello se aplica la sanción pecuniaria. En función de los análisis técnicos, se optó por una sanción u otra.

Las empresas que han activado la sanción pecuniaria, son empresas que se autodenunciaron ante el ex director, pagaron y repararon el

perjuicio fiscal, no hubo condonación. Hubo una diferencia entre la sanción pecuniaria y las querellas.

En el contexto contingente es muy relevante conocer cuál ha sido el uso de las facultades que la ley ocupa, y que ha habido un uso racional y técnico de la misma.

Si se analiza la moción, y se ven sus implicancias, el Servicio utiliza un enfoque de trabajo que analiza la complejidad de cada caso, según un modelo de gestión de cumplimiento tributario, donde se ve la proporcionalidad de nuestras acciones de tratamiento frente a las diversas situaciones de incumplimiento tributario. En el marco de la legislación tributaria vigente, que no es solo el uso de documentos tributarios falsos, involucra precios de transferencia, exceso de endeudamiento, nula o baja tributación, normas antielusión, el análisis técnico es mucho más profundo que el solo ingreso de querellas. Por lo tanto, cuando se toma conocimiento de las diversas situaciones que requieren una especialización profunda para definir las acciones proporcionales, se hace para cumplir las obligaciones tributarias.

Y por qué se necesita cumplir las obligaciones tributarias, porque se hace para lograr los ingresos que necesita el país para su desarrollo. Esta situación afecta la base impositiva nacional, y se pone en riesgo el patrimonio fiscal.

Si se ve cuáles son las diversas acciones de tratamiento que el Servicio utiliza cuando se detecta incumplimiento tributario, son proporcionales al nivel de incumplimiento. Así, hay incumplimiento por el simple desconocimiento u error del contribuyente, donde se aborda de modo masivo para efectos que se corrija el incumplimiento y lo reparen. Acá no hay siquiera sanciones pecuniarias, son meras acciones administrativas.

Hay del orden de 300.000 contribuyentes que todos los años se observan, tanto en las operaciones renta como IVA, donde hay acciones electrónicas para que se rectifiquen, se conmina, y se salva el perjuicio fiscal.

Cuando se aplican nuevas acciones, se tiene año a año sobre 30.000 casos del artículo 21 de la ley de la renta, en el ámbito de los gastos rechazados. Del orden del 20%, 4.000 casos pasan a auditorías tributarias, donde hay análisis complejos para definir donde estuvo la razón del incumplimiento, y si se detecta dolo, manifiesta intención, se tienen las dos herramientas para el Servicio, las sanciones pecuniarias, a la fecha 46, y las querellas, que al año son 35.

Se tiene diversos tratamientos en función de la gravedad del tratamiento y del riesgo de incumplimiento de los contribuyentes.

Esa es la forma como se opera.

Cuando se detecta una infracción tributaria, por una parte la sanción a la infracción puede ser la multa, la que procede una vez que se ha

pagado la diferencia de impuestos. En infracciones en que no es posible comprobar el dolo, se tiene esa herramienta. Pero cuando se ve la posibilidad de pena pecuniaria o privativa de libertad, se aplican diversos criterios, tales como el monto del perjuicio fiscal, la reiteración en la comisión de los delitos, el uso de asesoría tributaria, el efecto disuasivo, la calidad y suficiencia de la prueba y la factibilidad de obtener una condena.

Es relevante la factibilidad de condena. La herramienta de la querrela es una acción excepcional, pues se considera que se genere el efecto disuasivo. Si se querrela contra todos, el efecto disuasivo se relativiza.

Así, acá se aplica una de las vías necesarias, ya sea la sanción pecuniaria, la que es resuelta por un Tribunal Tributario y Aduanero, donde se aspira a obtener, una vez pagados los impuestos, al menos al 50% del perjuicio fiscal como sanción, cuestión relevante al momento de maximizar los ingresos tributarios. Por eso, algunas veces, se opta por la sanción pecuniaria y en otros, por la querrela, donde los antecedentes reflejan que son de mucha mayor gravedad.

Frente al incumplimiento de infracciones tributarias, existen estas dos alternativas de detectarse un caso sancionable con ambas sanciones.

Este es un trabajo no menor, es de alta especialización, incluso con llamado de declaración de los involucrados, con la auditoría de los libros contables, que finalmente determinan las razones para efectos de determinar si se aplica una sanción u otra.

La recopilación de antecedentes son un conjunto de diligencias para buscar la evidencia pertinente para acreditar un determinado hecho. El sentido de la norma actual, se condice con ello.

El procedimiento es de naturaleza administrativa. En segundo lugar es realizado por especialistas, quienes también lo son en modelos de negocios, no solo en tributación. Los informes tienen análisis técnicos, y de los efectos de la gestión en la recaudación tributaria.

Es relevante considerar que se resguarda el tesoro público y el patrimonio fiscal, que es el bien jurídico protegido, pues lo que le corresponde al Servicio es velar por éste. Cuando se persigue la sanción, lo que se busca es proteger el bien jurídico y que los contribuyentes de modo equitativo cumplan con la ley.

De prosperar la moción propuesta, se vería obstaculizada la oportunidad de la acción del Servicio, pues habría una disputa por los antecedentes. Claro, se puede establecer un trabajo conjunto, hay una relación de colaboración, pero cuando se haga una auditoría, si prospera la moción, el Ministerio Público podrá de oficio iniciar la acción penal y ello redundará en que en muchos casos se verá mermada la recuperación de los ingresos fiscales, pues el

que está motivado a pagar, pero esta investigado, esperará a que termine el juicio penal, y no tendrá otro incentivo para cumplir la sanción pecuniaria.

De concretarse la moción, el Ministerio Público requeriría toda la documentación del Servicio, y paralizaría su acción. Se presentarían dificultades para lograr la determinación de los impuestos en la oportunidad debida, y en materias de prescripción, donde los plazos siguen corriendo, de generarse algún obstáculo, se podrían ver casos en que terminaría imponiéndose el plazo de prescripción, y no se podría recuperar los impuestos ni siquiera por la vía civil.

El Servicio no solo recopila antecedentes fundantes, sino también persigue el cobro, y si el Ministerio Público inicia una querrela, se suspendería el procedimiento de cobro.

Las normas actualmente impiden el doble juzgamiento, tanto en sede administrativa como penal. De aprobarse, habría doble juzgamiento, el Servicio podría instar por la sanción pecuniaria y habría pugna entre los servicios del Estado, lo que generaría incertidumbre en los contribuyentes.

Hoy se resguardan los antecedentes de cada contribuyente, existe la reserva tributaria, y eso significa que cuando el servicio recopila los antecedentes, conserva la información solo para los fines propios del Servicio, que es aplicar los impuestos. La información de los contribuyentes está protegida por una serie de normas de carácter legal, se resguarda la información de los contribuyentes, quienes tienen el legítimo derecho de que se vele por los antecedentes tributarios que han puesto a disposición del Servicio para hacer una auditoría. Eso es relevante.

Sobre el sentido histórico de la norma actual, cabía recordar que durante la tramitación el año 2002 de la ley 19806, se discutieron las razones de esta facultad del Servicio. En ese momento, el ex director Etcheverry señaló:

*“...que el tema de las funciones institucionales del Servicio de Impuestos internos de acuerdo a las nuevas reglas procesales penales resultaba complejo, ya que producto de la fiscalización y de la necesidad de asegurar que las personas paguen sus impuestos, anualmente se detectaban más de 10.000 situaciones que podrían llevar a querrelas por delito tributario. Hay muchas facturas falsas y contribuyentes que reiteradamente utilizan dichos documentos...”*

Hoy esa cifra es más del doble.

Asimismo, *“...Puso de relieve que, de acuerdo a las atribuciones que tiene el Servicio de querellarse, o bien, de no querellarse y aplicar la sanción pecuniaria, los Directores Regionales que tienen delegada esa facultad, han aplicado en la gran mayoría de los casos sólo la sanción pecuniaria. Los casos más graves llegan al Departamento de Delitos Tributarios, donde son revisadas todas las pruebas y, en función de eso, se someten al Departamento de*

*Defensa Judicial para que dé su opinión. Considerando esa opinión, sólo en ese momento el Director resuelve si interpone o no la querrela respectiva.*

*Puntualizó que este es un procedimiento que se ha aplicado desde el año 1960 y que ha permitido que de los 10.000 casos de delitos tributarios detectados al año, solamente se presenten alrededor de 100 o 150 querrelas anuales. procedimiento que funciona adecuadamente, Lo anterior demuestra que existe un en virtud del cual los casos más graves se llevan a los tribunales de justicia a través de una querrela...”*

La sanción pecuniaria es más rápida y eficiente para recuperar los impuestos debidos, y la cuantía de las multas, pues pagando la multa que repare el mal causado va del 50% al 300%.

Por ello, cabía recordar lo declarado por el ex senador Silva Cimma durante ese debate:

*“...que la esencia del problema deriva de la aplicación del artículo 80 A de la Constitución Política, norma que debía ser interpretada de acuerdo con la sana razón. Sobre el particular estimó que la práctica demuestra que necesariamente organismos de esta naturaleza, típica y exclusivamente fiscalizadores, tienen el deber de analizar a fondo los antecedentes, antes de que se determinen o se llegue hipotéticamente a la conclusión de que los hechos son constitutivos de delitos.....*

*Para eso, deben realizar una investigación amplísima en el campo administrativo fiscalizador y que es fundamental, porque de otra manera dejarían de cumplir el sentido genuino que determina la justificación y la existencia de las instituciones.*

*Si dicha disposición constitucional era interpretada en un sentido de excesiva amplitud, se llegaría a la conclusión que sería inútil la gestión del Servicio de Impuestos Internos, lo que obviamente no corresponde ni a la lógica de la Constitución Política ni a la de este proyecto de ley....*

*“... toda vez que es factible que Impuestos Internos llegue a la conclusión de que los hechos investigados, para lo cual habrá acumulado muchos antecedentes, son constitutivos de delitos, y, en ese ese momento, podrá pensarse que suspenda la gestión. Una solución distinta podría llegar a anarquizar el sistema, llegándose a jibarizar toda la gestión administrativa fiscalizadora, que va a tener tal carácter hasta el momento en que el órgano que tiene la responsabilidad estime que el hecho es constitutivo de delito”.*

La actual norma del 162, se condice con las prácticas internacionales, el tener la facultad exclusiva es comparable al de países tales como Alemania, Holanda y Estados Unidos, entre otros. Según reportes de la OCDE es comparable con la de países desarrollados. Acá no se está hablando de un caso raro que ocurre solo en el país. Esto también es un argumento más para no acoger la moción.

Finalmente, había que revisar las cifras.

Hoy se tiene del orden de 272 querellas que el Servicio ha presentado, desde el año 2008 a la fecha. Son casi 10 años, donde el Servicio ha presentado querellas para que el Ministerio Público inicie la investigación. Existen querellas vigentes, sin sentencia, donde las más antiguas datan del año 2008, donde solo en el 26% de los casos sin sentencia ha habido formalización. En el 73,2% restante, siquiera se ha podido formalizar, el Ministerio Público no ha tenido la capacidad de formalizar.

Pero lo más relevante, es que ese 73,2% de las querellas no formalizadas representan un perjuicio fiscal sobre los \$62MMM. Hoy existen querellas en investigaciones donde no han sido formalizados los investigados, en las que el país no ha podido recuperar esa cifra, y este es un dato no menor, es un dato práctico. Además de los antecedentes, si se ve lo que hoy ocurre, hay un problema grave.

Ese es dinero no recuperado, por lo que había que hacer un análisis desapasionado.

Por el lado de las querellas, en los últimos cinco años, del total de condenados por querellas de delitos tributarios, solo se ha obtenido sentencia de cárcel efectiva para el 9,4% de los casos. Cuando se ve que se quiere un trato igualitario ante la ley, y que los contribuyentes cumplan cárcel, sólo el 9,4% de los condenados ha cumplido cárcel efectiva.

Y si se ven los montos involucrados, alcanzan apenas al 15,3% del perjuicio fiscal perseguido, mientras que por la vía infraccional se obtiene, al menos, el 50%.

Estos son antecedentes que se deben considerar al momento de resolver.

**El diputado señor Tarud** señaló que el Ministro Juica se ha pronunciado en la misma línea que el Fiscal Nacional, y que este proyecto que se ha presentado. El Contralor General de la República ha pedido que se clarifique cómo se definen la interposición de una querella, pues hay una duda general en el cómo se querellan.

Acá, en una radio un diputado argumentó que esto sería inconstitucional, o propio de ley orgánica pues se le daría una nueva atribución a la Fiscalía, pero eso no resiste ni siquiera un análisis para un estudiante de derecho, pues la Fiscalía tiene la obligación de perseguir los delitos.

Lo único que se persigue con este proyecto, es terminar la con el hecho que la decisión la adopte un funcionario designado por el gobierno de turno, es un tema de la justicia. Evidentemente, esto tiene que cambiar.

Sobre la comparación con los demás países, no todo lo que hagan los demás es correcto, había discriminación ante la ley entre contra quienes sí y quienes no se interponen querellas. Si hay delito de por medio, esto

tiene que ser de acción pública, como todos los delitos, y los jueces, juzgar, que a ellos les corresponde.

Esperaba que este proyecto se votara pronto, ojalá el mismo martes, para que pueda pasar a la Sala, pues en ella se puede revertir la situación de lo ocurrido en Hacienda.

La ciudadanía está esperando una señal del Congreso Nacional, pues este tema ha causado un tremendo malestar en ella, uno de los desprestigios más grandes desde que se acuerda, pues se han visto involucrados personas de derecha a izquierda. La gente se pregunta qué pasa con este u otro caso, y la cuestión es dejar que los fiscales actúen.

Todos los delitos son delitos, y no se les puede seguir restando la posibilidad de actuar, no puede quedar al arbitrio de la decisión de un funcionario designado por el gobierno de turno.

**La diputada señora Turres, doña Marisol**, estimó que había dos temas, uno de forma y otro de fondo. El de fondo sin duda era a quien dejar con la iniciativa para efectos de solicitar que estos delitos se investiguen. En lo personal, le parecía bien que la iniciativa la tenga el Servicio, como el caso de colusión la tenga la Fiscalía Nacional Económica.

Pero ese no era el punto, la cuestión era saber por qué hoy estamos acá en esta sala. Eso preocupa, ahí es donde ha habido serias discrepancias con el Servicio y el Ministerio Público.

Partiendo de la base, había que distinguir antes y después del caso Penta. Cuando habían estas boletas ideológicamente falsas, a veces la gente ni siquiera asume lo que eso significa. Muchas veces el mozo del restorán pregunta si se quiere factura o boleta, porque se ve recurrentemente que personas que comen en los restaurantes, pasan esos servicios como gastos de la empresa, y es difícil que el Servicio fiscalice todos esos casos, pues son conductas que se dan regularmente. En muchas empresas hay más camionetas de las que se necesitan, pues muchas veces los dueños compran la camioneta para el hijo o la señora, para poder descontar el IVA. Son actos irregulares, y en esos casos, el Servicio pasa multas cuando se dan cuenta.

Y eso sucedía antes de Penta, pero con Penta la cosa cambió.

No le cabía duda y no era en esa época director el actual. Algunos dicen que hubo presiones, pero claramente hubo una intencionalidad política, se abrió una caja de Pandora y ahí, eso no gustó. Lamentaba profundamente que hoy día se tenga al Servicio y al Ministerio Público en este ambiente de duda y falta de credibilidad que recorre a muchas instituciones.

Estos casos han hecho famosos a varios fiscales. Hoy el fiscal Gajardo hace declaraciones que no competen hacer a un fiscal, estar

enjuiciando a los parlamentarios por como voten este proyecto. Hoy se cuestiona al Servicio de Impuestos Internos, un servicio del que estábamos orgullosos.

Pero a su juicio, el Servicio usó de manera arbitraria el cuándo se querella o no. Como parlamentaria de la UDI, siente que ha habido una mano más dura cuando se han visto involucradas personas de su partido. Dice esto de frente.

Y cuando se ve hace poco la noticia de que no habrá más querellas en Soquimich, y desde el mismo Servicio y el Ministerio Público se informan hechos, donde en casos similares a otros si se dedujo querella, llamaba a revisión.

La norma vigente no es mala, sino el uso que se dio de esa facultad.

Ahí viene otro debate, que no sabía si alcanzaba para este gobierno, o se dará en el próximo, sobre quién nombra al director del Servicio, pues claramente no tiene autonomía. Todo muestra que el director y sus directrices no son técnica o profesionalmente objetivas, en relación a lo que se ha hecho con las querellas.

Por qué le gusta lo vigente, pues es un servicio profesionalizado, probablemente más que la mayoría de los fiscales. Uno en derecho nunca termina de aprender, pero acá se tiene un servicio especializado, con un aparataje para actuar. Pero más allá de quien deduce la querella, la cuestión es la forma parcial, la discrecionalidad que ha habido en estas causas.

Se mostró que una causa son \$4MMM y otro, \$200, son perdidas también, pero lo que aquí está en juego no es el perjuicio para el fisco, el tema es si esas conductas son o no delictivas. No puede ser que las cosas sean delictivas, según si quiere el director que se investigue o no.

Ley pareja no es dura. Nadie pide normas o trato especial, pero se deben tener normas claras. Un hecho es o no delictivo, y de acuerdo a eso, hay o no persecución penal, no puede depender de una voluntad el inicio o no de la investigación, pero no creía que darle la facultad al Ministerio Público cambiara algo. Podía ahí abrirse espacio a una vendetta política. Lo que se necesita, es que la ley se aplique de igual forma.

**El diputado señor Saffirio** señaló que solo a vía de titulares, toda la información que se tiene, es a propósito de un dictamen reciente del Contralor General de la República, cuando da los fundamentos por los cuales estima que la decisión del director sobre no presentar denuncia o querella, si bien es exclusiva, no puede ser carente de fundamento o arbitraria.

Esos argumentos los hacía propios, pero no podía dejar pasar algo.

Señaló al Director del Servicio, que la tramitación de las mociones, sus tiempos los define el Congreso, pero un principio básico es cuándo y como legislar.

El énfasis que ha puesto el Servicio ha sido la necesidad para reemplaza la sanción penal para obtener más ingresos fiscales, pero el Servicio no cumple el rol de recaudador, la misión del Servicio es que el contribuyente cumpla, pues la misión de recaudación es de la Tesorería General de la República. Son dos roles distintos.

El fundamento para no denunciar a favor de lograr las multas no es el tema en discusión, sino la exclusividad en la persecución penal, eso es lo que se debe revertir, pero por su propia naturaleza, es el Ministerio Público el que debe perseguir y lograr la responsabilidad penal cuando se cumplen los requisitos.

El Servicio no ha dicho que no haya delitos, sino que no los va a denunciar. Lo que está en juego entonces no es la recaudación, sino la fe pública. Cuando el Servicio dice a priori que no se presentarán querellas, está diciendo que hay dos categorías de ciudadanos, pues respecto de algunos se querella, y en otras, no.

No le parecía razonable el argumento sobre la obligación de resguardo, como razón para llevar a omitirse a presentar acciones penales. No entendía que el espíritu de esa norma lleve al servicio para mantener la reserva, porque eso significaría que en el espíritu de la norma, la reserva garantiza la impunidad respecto de determinados contribuyentes.

Este proyecto, además, tiene una connotación jurídica, sin lugar a dudas, pero el debate en su acepción más amplia es político, un rol de la política.

Hay un gran problema político, no jurídico, y el Director del Servicio está implicado, pues es un actor político, responde a la estructura vertical del Estado central, no viene de la estratósfera, es designado por la jefa de Estado, incluso si lo fuera a través del sistema de Alta Dirección Pública. Acá mismo se ha cuestionado el cómo se designa mediante ese Sistema, cuando se vetan a los propuestos por el Servicio Civil, hasta que en la propuesta viene la persona que se quiere específicamente para el cargo.

No es un problema que tiene una sola arista, el Fiscal Nacional ha sido categórico, el Contralor ha entregado su mirada categórica sobre el tema, y este Congreso Nacional tiene la responsabilidad de legislar sanamente para no replicar las situaciones de las colusiones, aunque las características son distintas. El debate sobre colusión, en que se ingresó una indicación donde se planteó que la facultad de querellase estuviera ante el Fiscal Nacional Económico y el Ministerio Público. Ello fue rechazado, y al poco tiempo se enteraron de las colusiones de las empresas.

**El diputado señor Gutiérrez** señaló que lo planteado por el Fiscal Nacional, en cuanto a apelar al principio de igualdad, es un principio constitucional. Esta norma de la discrecionalidad tiene algunos inconvenientes de inconstitucionalidad.

Cuando el Director del Servicio hace una defensa cerrada de su facultad, pidiendo que esto no vaya a ser conocido por el Ministerio Público, la sensación que queda, le daba la impresión, como si se le fuera a entregar la facultad a un monstruo. Cuando se oye al director del Servicio con vehemencia defender sus facultades, pareciera que el pasarle el tema al Ministerio Público fuera algo abominable.

Pero no se dice nada abominable. Esa competencia, en cuanto a quien conoce con exclusividad, no se está diciendo ningún garabato.

El sistema consagra que el Ministerio Público tenga salidas, es un sistema negociable, algunos parlamentarios han salido fruto de negociaciones, cuál es la hecatombe, ninguna, no se dice nada terrible.

Cabía recordar por qué estaban en esta discusión. Jorrat ratificó que recibió presiones, sobre que no había que seguir metiéndose en el caso Soquimich, y el tema acá, la gran diferencia entre el Servicio y el Ministerio Público es que el Servicio no es autónomo, y ahí se generan todas estas preocupaciones. El Servicio es un dependiente, una autoridad administrativa dependiente de una autoridad política, mientras el Ministerio Público es autónomo, puede dirigir la investigación como dispone la ley.

Quizás en comparación, \$300MM no sean tanto frente al caso de \$4MMM, pero en sí, es mucho dinero. Puede que alguien estime que no es tanto, pero lo es. El caso famoso de la arista Soquimich de Penta, donde está ahí formalizado, y acusado, Santiago Valdes, jefe de campaña de un candidato presidencial, su boleta la emitió por Bancard, está formalizado, y como el la tiró, no le pasa nada porque no hay denuncia o querrela del Servicio, mientras que el senador Moreira, quien reconoció el hecho, está investigado pues sí hubo acción del Servicio.

Que ambas cosas ocurran simultáneamente, es incoherente. Eso es lo que no se comprende.

La única forma de entender esto es que hay una decisión política de por medio, pues de lo contrario se politiza la persecución penal. Si políticamente se decide no perseguir penalmente, ahí se va todo al tacho de la basura.

Por decisiones políticas se decidió no perseguir a los violadores de derechos humanos, hubo que bregar por cuantos años para que esa decisión política se fuese al tacho de la basura. Politizar la decisión judicial, manda todo al tacho de la basura.

**El diputado señor Andrade** señaló, a propósito de la crisis de identidad que se ha instalado en la opinión pública, que el debate se ha producido fuera del marco del parlamento, entre dos instituciones que merecen mucho respeto. No se atrevía a decir que era un hecho pintoresco, salvo por los twitter de algunos fiscales, pero es normal que así sea cuando se trata de atribuciones de unos y otros.

La semana pasada la intervención del Director del Servicio de Impuestos Internos (en adelante, 'el Servicio') fue muy interesante, al igual que la del Fiscal Nacional del Ministerio Público. Pero había un error, pues el tema no tiene que ver con la competencia de uno y otro, sino del problema político que se tiene, que es que el dinero, a través de mecanismos delictivos, influye en la actividad política, en la libertad que tiene la ciudadanía para pronunciarse sobre ciertas cuestiones.

El tema no ha sido explícito, y se ha intentado construir una solución a un tema que no se explicita, mediante argumentaciones como si fuera un tema técnico jurídico. La solución no se hace cargo del problema.

Asimismo, hay un segundo problema, y es que el sistema político, en estos términos, manoseados por las autoridades políticas de turno, la labor de otros. Se espera que los tribunales, el Ministerio Público u órganos administrativos se hagan cargo de quienes habiendo cometido ilícitos, siguen siendo actores de la política, personas a quienes por acción u omisión seguimos respaldando.

Acá se está entregando la atribución a órganos que no tienen que hacerse cargo de eso. La discusión sobre la moción no asume el debate que debe manifestarse. Quería hacerse cargo del problema, y si lo lograba, sabría a que venía a esta sesión, quería hacerse cargo del problema desde ese enfoque.

El Ministerio Público tiene que hacerse cargo de todo lo que tenga caracteres de delito. Acá hay una excepción, pues aquellos casos en que el Servicio tiene una primacía por la naturaleza de los hechos que investiga, le toca al Servicio decidir. Al respecto, se podría plantear que es uno u otro, pero esa decisión no se hace cargo del problema.

No es lo mismo cuando el delito tributario se hace para enriquecerse, a cuando se hace para influir en la libre voluntad ciudadana, cuando el delito tributario se comete para ser un actor más en la relación dinero y política, que es una relación perversa. Esa es la discusión real.

Así, la distinción que se haga para efectos de esta moción, para que tenga esta centralidad, necesitaría que cuando el delito tributario tenga que ver con la defraudación del fisco, el enriquecimiento de una persona, no vea razón alguna para que el Servicio no tenga la primacía de la acción penal. Pero cuando el delito tiene el fin de influir en la voluntad soberana que se expresa en la política, eso ya excedió el tema tributario y se metió en la libertad de decisión. Así,

cuando el delito es de otra entidad, debería el Ministerio Público tener la primacía, tal vez pensar en un tema de cuantías sería una opción a analizar.

No quería que el Ministerio Público saliera con la facultad de perseguir, no mencionaría a nadie, pero a quien hizo para influir en la feria libre, y con el mayor respeto a la Fiscalía, le sirviera para engrosar el listado de logros para el cumplimiento de metas de gestión. Eso no es razonable. Pero cuando las cuantías son altas, o tienen el propósito señalado, no es lo mismo cuando una gran empresa actúa a que cuando una persona natural que vendió cassettes termina preso, el contribuyente 'de a pie', o los emprendedores, este nuevo concepto de la sociología política incorporada en Chile.

Si se logra hacer la distinción, cosa de vincular la discusión a lo real que está en la mesa, la cuestión sería compatibilizar ambas perspectivas.

**El diputado señor Ceroni** expresó que este era un tema complicado como para tener una posición clara y poder votar, porque para unos es claro que el Ministerio Público es el que tiene la facultad para investigar todo lo que signifiquen hechos que sean delitos. Esa es una cuestión general, y no debería haber nada que se negara a ese tipo de situaciones.

Pero por otra parte, se ve que al país le es importante, desde el punto de vista del Servicio, recaudar y recuperar recursos de quienes de modo mal habido han tratado de no pagar, y no ingresar los bienes al fisco.

Desde ese punto de vista, se empiezan a tener dudas, pues aquel contribuyente que sabe que finalmente al descubrirse los hechos en que está involucrado, se le sancionará también por el Ministerio Público, y tendrá sanciones altas, no va a aportar ningún antecedente ni llegará a acuerdos con el Servicio, y tratará de evitar con sus abogados, por todos los medios posibles, que se le sancione. Al final, nos quedaremos sin pan ni pedazo, el Ministerio Público no llegando a la sanción penal y el Servicio no llegando a recaudar.

Sobre todo, partiendo de la base que para establecer estos hechos, se requiere gente especializada. El Servicio tiene años en esto y cuando ha habido una situación que no es la procedente, actúa, y sobre eso uno diría que ahí como que habría una falencia grande en el Ministerio Público, pues ese personal, podría estar equivocado, pero pareciera que no lo tiene y si en cambio el Servicio, para efectos de recuperar los dineros.

Y también para agregar en la línea parecida, pero semejante a lo planteado por el diputado Andrade, y que le preocupaba, era que quienes serán perjudicados son los pequeños contribuyentes, pues no tendrán asesoría. A veces son pesquisados por el Servicio, que tiene las herramientas y los conocimientos que el pequeño no, mientras que los grandes contribuyentes están súper asesorados, entonces el pequeño estará siempre fácilmente pesquisable. Esto es casi como el tema de las materias laborales, los pequeños son los que pagan los platos rotos, y lo que se ve en el Servicio es que los pequeños son los más vulnerables, pues son los que tienen menos asesoría. Si se

dice aquí que se vota otorgando las facultades como correspondería, quizás al final no se sanciona a esa persona, y tampoco se recaudan recursos para el fisco.

Lo otro que le preocupaba, era el tema constitucional. En la Comisión de Hacienda el Gobierno vio el tema de la reserva de constitucionalidad. No es un tema que se deba desestimar, pues el propio Ejecutivo en el informe de la Comisión de Hacienda dice que ellos plantearán reserva de constitucionalidad, pues es de iniciativa presidencial.

Si le preguntan como abogado, el Ministerio Público debería tener la atribución, pero tenía esas grandes inquietudes para votar.

**El diputado señor Soto** manifestó que se enfrentaba una polémica que no era nueva. Ya se vio en la discusión sobre libre competencia, cuando se revisó la facultad exclusiva del Fiscal Nacional Económico para querellarse en los casos de colusión, donde el Ministerio Público reclamó contra la discrecionalidad de esa Fiscalía. Se planteó que eran materias complejas, con una tramitación a varios niveles, y la cuestión era conciliar diversos intereses, no son los mismos.

La polémica pública en esta sala, es no haber ejercido la facultad discrecional el Servicio respecto de los casos que develó el Ministerio Público, pues ante la ciudadanía merecían ser investigados.

La percepción ciudadana sobre la gravedad de los delitos era distinta, era subjetiva, y se agrava cuando el Servicio no explica los hechos en que funda su decisión, no se ha visto una resolución que diga por estos y estos hechos no se ejercerá la acción penal, y ante la opinión pública podría parecer falta de fundamento, o caprichosa, en palabras de la Contraloría. La cuestión es que no se establecen parámetros.

Estaba de acuerdo en que no todo delito tributario debiese ser materia de una investigación penal, pues probablemente los delitos de bagatela no deberían llegar a tribunales. Pero tratándose de las empresas más grandes de Chile, con indicios concretos de haber cometido fraude, se ve de modo nítido la justificación de las acciones penales. No hay mejor elemento disuasivo que el ejercer acciones penales cuando las personas son poderosas.

Se ve cuando se ejerce contra actrices, cantantes, futbolistas, pues es una señal clara de que los delitos serán sancionados y habrá reproche penal, peor acá al no ejercer la acción penal, se ve la señal contraria. Eso es lo dramático de la polémica que motiva la revisión de la norma.

Lo otro que preocupa, es que deben establecerse parámetros que eliminen la discrecionalidad del Servicio, y los casos de gravedad debiesen ser expresamente establecidos, al igual que en la Fiscalía Nacional Económica, que la decisión podría ser revisable por los tribunales.

Se inclinaría por elaborar una indicación que plantee que esta clase de delitos tributarios, donde hay concurso de delitos con donaciones

irregulares de campaña, delitos contra la fe pública, que son graves más allá de la recaudación, son graves porque dañan el corazón de la democracia, tengan una legitimidad diferenciada para actuar en las investigaciones penales.

Quizás eso no tenga relación directa con el tema, pero ahí nos hacemos cargo del debate de verdad, pues ahí está la señal con ese tipo de persecución, esa es la señal cristalina, y la peor es la impunidad.

**El diputado Monckeberg, don Cristián**, señaló que como el diputado Andrade estaba sorprendido sobre a qué se había venido, en el informe de Hacienda del proyecto de ley se citó a una serie de personas, todos muy conspicuos, Jorrat, Fernández, y todos dieron opiniones bien potentes, pero le llamó la atención la del Gobierno.

Sergio Granados, de la Dirección de Presupuestos, consideró que esto corresponde a materias de iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República, manifestando que se haría reserva de constitucionalidad en el momento respectivo.

En tal sentido, había que tener claridad sobre el tema de la constitucionalidad, pues si el Supremo Gobierno anunció que plantearía cuestión de constitucionalidad, y la Comisión de Constitución está evitando el debate sobre la materia.

Entonces, habría que ver si consultar a Secretaría sobre el tema, pues sobre tenía dudas, los datos no eran claros, no sabía si se había abordado una respuesta al tema del doble juzgamiento, si el Ministerio Público se hacía cargo de la persecución penal, y el Servicio seguía en la sede administrativa o civil, y por lo tanto, generaba un grado de complejidad importante en el sistema jurídico. Esa es la cuestión más de fondo sobre los temas planteados.

Había buenos argumentos por ambas partes, que se paralice el procedimiento tributario era atendible, pero los temas de constitucionalidad o doble juzgamiento no podían ser obviados, había que tener respuestas claras sobre esos temas.

Más que entregar la facultad a alguno de los dos, la cuestión es que hay una circular del 2015, que reguló la discrecionalidad creando estos criterios que ya fueron plantados.

Le entusiasmaba avanzar en una fórmula que regule la discrecionalidad, que no es normal que exista, incluso tanto le incomodaba al Servicio la discrecionalidad que tuvo que dictar una circular, o lo mismo que dijo la Contraloría en su dictamen, que no surgió por el caso Penta, sino que es de perogrullo, que la razón debe estar motivada, pero se ha utilizado para decir que en este caso habría subjetividad.

Hizo presente que la Corte Suprema no se ha pronunciado en este tema. Se pronunció sobre el tema del Servicio Electoral, y ahí la Corte Suprema señaló que la decisión discrecional no es el óptimo, pues en el fondo

puede estar entregado a un órgano eminentemente político, alguien designado por el Presidente de la República, pero no se pronuncia sobre este proyecto. Derechamente, en este proyecto no ha habido pronunciamiento por parte de la Corte Suprema.

Así, dejaba planteada la pregunta sobre el doble juzgamiento, que es relevante tener claro, y su inclinación, si se podía hacer ahora, si había que extender la sesión, pero era de la idea de regular la discrecionalidad, más que generar a los dos organismos la opción de ejercer la acción penal.

**El diputado señor Coloma** señaló que compartiendo lo planteado por el diputado Monckeberg, solicitó a la Secretaría si a su juicio era o no admisible el proyecto de ley, pues se trataría evidentemente de una atribución de la Presidencia de la República. Por ello, quería conocer la opinión de la Secretaría.

En segundo lugar, estimó que se estaba discutiendo el proyecto de ley equivocado. Quizás la cuestión a discutir sea la independencia del Servicio de parte de las autoridades políticas.

Si no se hubieren ejercido presiones, quizás otra sería la discusión. Lo que resultaba insólito era al día de hoy, lo poco claro que hay sobre las llamadas de Rodrigo Peñailillo al ex director Jorrat. Por lo tanto, esto no se soluciona en base a dar o no una atribución al Ministerio Público, la verdadera solución es la real independencia del Servicio de parte del Ejecutivo. El tema no ha sido de montos, no ha sido de reiteración, sino la filiación política en contra de quienes se querelló el Servicio.

No dejaba de ser contradictorio que uno de los autores de la moción, Insunza, haya solicitado el sobreseimiento en una investigación en su contra, por no presentarse la querrela por parte del Servicio, y ese era un caso bastante similar a otros donde sí hubo querellas. Lo que hay es un abuso, un uso y abuso de atribuciones de parte del Servicio, según las filiaciones políticas de los querellados, y eso es parte importante de lo que ha dañado la confianza de la gente.

No es un misterio para nadie que hay querellas contra unos y no contra otros.

Así, la cuestión era legislar por un servicio realmente autónomo.

**El diputado señor Chahin (Presidente)** expresó que en primer término, sobre el tema de la admisibilidad, le corresponde como Presidente pronunciarse sobre ello. A su juicio, no se estaba otorgando una nueva atribución al Ministerio Público, no se le creaba una facultad nueva, sino lo que hace la moción es eliminar una traba procesal para dar inicio a una investigación penal, y por lo tanto, el tema de la constitucionalidad quedaba zanjada a partir del propio texto constitucional. Nadie podría plantear que acá se da una nueva atribución.

Acá hay buenos argumentos que se han expresado, tanto por el Servicio como por el Ministerio Público, y el gran problema es la discrecionalidad. Ojalá nunca más el Servicio se vea presionado, y que cuando tenga buenas razones para adoptar una decisión en un u otro sentido, no sea objeto de un escarnio público enorme.

En este caso, no solo el Ministerio Público está impedido de investigar de oficio, pues el Consejo de Defensa del Estado tampoco puede actuar, salvo requerimiento del Servicio. Y cuando se tiene un servicio público encabezado por una autoridad unipersonal, esa discrecionalidad puede terminar en arbitrariedad, y un servicio tan importante debe verse liberado de esa tensión.

Se vio respecto de ciertas condonaciones, en el caso Johnson, que debería haber una colegiatura en ese Servicio, y uno lo que empieza a mirar es el derecho comparado. En el derecho alemán, efectivamente el Ministerio Fiscal delega facultades en la administración tributaria, pero hay casos en que sí puede investigar, por ejemplo, cuando hay delitos conexos. Así, cuando solo es un tema tributario, puede delegarse, pero de lo contrario, el Ministerio actúa por sí.

En España prima la cuantía, cuando es sobre 120.000 euros, el Ministerio Público puede actuar de oficio, no requiere pronunciamiento previo.

En el derecho francés, quizás lo más parecido a lo nuestro, la autoridad tributaria tiene el monopolio de la acción penal, y debe decidir si actúa o no penalmente, pero tiene un requisito de una opinión favorable de una comisión de expertos, comisión integrada por personas calificadas, hay una comisión colegiada, con autoritas para pronunciarse sobre ello.

Es claro que dentro del Ministerio Público deben existir unidades especializadas, pues no es un tema fácil, y requiere de análisis técnicos. Por lo tanto, a su juicio, había dos caminos posibles.

Cabría respaldar esa vía, que lo que busca es ir generando criterios objetivos que establezcan un espacio para que Servicio pueda adoptar la decisión, y respecto a delitos conexos, pueda de oficio investigar el Ministerio Público. Eso le quita discrecionalidad al Servicio. Otra alternativa, subsidiaria, es eliminar el requisito que el Consejo de Defensa del Estado tenga que necesitar el requerimiento del Servicio para querellarse. Ahí se tiene un órgano colegiado que toma las decisiones en sus diversos comité, acá sería el comité penal.

Podría ese órgano colegiado decidir si se querellan o no, e iniciar la acción penal.

La primera conclusión, en el marco de una discusión pública, da cuenta de la necesidad de legislar, avanzar si los términos de la moción es la vía más apropiada, es un tema a debatir. Parecía apropiado el

camino de buscar estos requisitos, condiciones, para que el Ministerio Público pueda actuar de oficio.

**El diputado señor Saffirio** señaló que el carácter de conflicto político, que está en el sustrato de la discusión del proyecto, quedó claro en la sesión anterior. Se hizo clara referencia a que hay un problema político a resolver sobre la relación del dinero y la política.

Quiso hacer referencia a que el proyecto esté aquí. El profesor Tavolari, a propósito de la discusión de reformas a la ley de aduanas, a la existencia de esos tribunales, de órganos de la administración para ejercer atribuciones jurisdiccionales, estimó que era incompatible con el procedimiento penal, pues lo que no le parecía razonable era irrumpir en las atribuciones de los órganos constitucionales.

En esa oportunidad hubo opiniones de Tavolari sobre las facultades del Consejo de Defensa del Estado en esos temas, y planteó que la definición que se adopte debe estar acorde con las reglas constitucionales que le asignaron al Ministerio Público la exclusividad de la persecución penal. La ausencia del Ministerio Público antes de la reforma procesal penal, justificaba que el Consejo de Defensa del Estado asumiera ese rol, pero en lo sucesivo, que el Estado actúe a través de dos órganos no era pertinente.

Así, la intención de ese artículo es aportar elementos de juicio para ilustrar a los tribunales, pero no resultaba posible que una ley orgánica especial disponga que la decisión del órgano administrador pueda obligar o limitar la potestad constitucional del Ministerio Público, como en los casos de los delitos tributarios.

El profesor Piedrabuena también estimó que esta regla resultaba inconstitucional.

Bajo esa lógica se planteó una indicación, que aborda tanto el tema de la discrecionalidad, la actuación del Ministerio Público, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos temas, a fin que sean temas tenidos en cuenta.

**El diputado señor Rincón** señaló que cada vez se convencía más que el Ministerio Público tenga la iniciativa, pero cabría despejar cuando la Sala se pronunciaría sobre la situación común de la tramitación legislativa, alterada en esta ocasión. La Comisión de Hacienda fue la comisión de origen, jamás debió ser así, pero en fin, pero le gustaría saber cuándo o en qué momento la Sala ha aprobado la idea de legislar. Salvo que esté equivocado, eso no ha ocurrido.

**El diputado señor Tarud** señaló que la verdad es que este proyecto de ley se ha chuteado más de dos años. La ciudadanía está viendo esto por la televisión y debe estar muy confundida. Las intervenciones empiezan de una forma y terminan de otra, pues le costaba comprender, un delito es un delito, pero no veía como un funcionario designado por el gobierno de turno podía

tener la facultad de querellarse ante unos delitos, y no hacerlo con otros. Eso era una discriminación completa.

Cuando la opinión de la Corte Suprema, a la que le daba mucho respeto, cuando el Contralor General de la República le ha pedido explicaciones al Servicio para que señale cuando se querellan, cuando acá en esta Cámara de Diputados hay gente que ha metido boletas falsas.

Agregó que la Sala aún no se ha pronunciado, pero debe hacerlo. Son muchos proyectos que han sido rechazados por las comisiones y son dados vuelta en la Sala. La cuestión era votar el proyecto, y que llegue de una vez a la Sala.

**El diputado señor Cornejo** señaló que de la intervención del diputado Tarud, se demuestra que un proyecto de esta naturaleza no es bueno discutirlo ni intercambiar opiniones a mata caballo.

Creía que no era un buen sistema de legislar el que se den mandatos imperativos para pronunciarse sí o sí en una semana, no era un buen pronunciamiento el que saldría de esa forma de trabajar.

En segundo lugar, insiste en la posibilidad de pedir un plazo razonable, pues es bueno escuchar al Ministerio Público y al Servicio, pero también a quienes tienen miradas sistemáticas sobre este tema. Sin entrar a discutir sobre el mérito de la indicación anunciada, podría haber otras implicancias jurídicas en estos temas. Por ello, convendría escuchar exposiciones más bien del mundo penal.

Agregó que le llamaba profundamente la atención la discusión de este proyecto, pues esta facultad del Director del Servicio la tiene hace bastante años, y la pregunta que cabe hacerse es por qué después de tantos años se discute si es conveniente si la mantiene o no.

La discusión se genera por la discusión de todo lo que ha ocurrido. La institución del Servicio, o esta misma Institución a la cual pertenece esta Sala, no goza de confianza, de falta de credibilidad, todo se da dentro de la atmósfera de reciproca desconfianza, donde no quería decir que sería el tema de la comisión, pero decisiones diversas podrían motivar a votar en un u otro sentido debido no a convicciones personales, sino a otras de otro tipo.

Tercero, en ese ambiente, las dos cosas que se han cuestionado son las siguientes.

La primera, la facultad decisoria de Servicio, que en esta atmósfera se pone en duda la autonomía del Director del Servicio. Ha leído con atención el artículo que escribió el Director del Servicio hoy en el Mercurio. Fíjense que si se lee con atención, los argumentos para justificar de buena manera, y de buena fe, la actuación del Servicio, servirían incluso para justificar en muchos casos el que no tenga la facultad que pretende defender.

Cuando él pone el acento en criterios técnicos, de rigor técnico y de propósito recaudatorio, esa misma justificación permitiría que el tema penal no esté en el Servicio.

Y el segundo tema puesto en duda, es si es conveniente o no que una autoridad unipersonal tenga la facultad para decidir por sí y ante sí si se querella o no. Podía equivocarse, pero entendía que había otras autoridades, había varias otras situaciones donde ello es así. Es decir, donde esa aparente discrecionalidad existe, y no ha sido cuestionada. Dicho eso, estimó que podrían haber, y por esa razón valdría la pena tener más sesiones, pues caben varias fórmulas de solución.

Otra posibilidad era que el Servicio pierda la facultad discrecional, pero cuando decida no querellarse deba fundarlo y que esa decisión pueda discutirse en tribunales. Con todo, la cuantía propuesta en la indicación del diputado Andrade de \$15MM es muy baja.

Sin perjuicio de ello, había varias posibilidades, o debiera haber varias que mantuvieran el equilibrio entre las facultades técnicas y la necesidad de que hayan delitos que efectivamente contribuyan en el mundo de hoy a generar más desconfianza que confianza, y por tanto, si el valor a preservar es la confianza en las instituciones, que esa confianza pueda ser protegida.

Lo que quería decir, era que debiese tenerse un par de días para lograr una solución, encontrar una adecuada fórmula de solución, pero lo que no podía ocurrir, era que mañana o pasado cuando se tome una decisión acá o en la Sala, los que decidan no lo hagan por una convicción, sino por un ambiente deliberante. Eso es tan insano, como la atmósfera que se ha ido generando alrededor de este tema.

Así, se podría pedir un plazo acotado, donde tanto el Director del Servicio como el Ministerio Público podrán contribuir a encontrar una solución. Acá hay temas jurídicos y políticos no resueltos, y cuando la política no resuelve temas políticos, se le endosa a otros, cuestiones que no debían ser así.

**El diputado señor Squella** señaló que sobre los argumentos que se han esgrimido, tenía algunas dudas. Se habla de la discrecionalidad insólita que ha tenido el Director del Servicio, y entonces por ello, tendría que entregarse la facultad al Ministerio Público, sin necesidad de contar con su informe previo, pero el Ministerio Público también goza de cierta discrecionalidad, goza del principio de oportunidad, y al interior del Ministerio Público, al gozar de ese principio, tratan de incluirlo en ciertos parámetros racionales.

Que quería decir con esto, la discrecionalidad no es el problema, la arbitrariedad si lo es. Entonces, había que hacerse cargo de la arbitrariedad.

Por ello, ojalá escuchar a expertos. No tuvo la oportunidad de escuchar la intervención del Director del Servicio pero es sabido que uno de

sus grandes argumentos es la recaudación. Se imagina que nadie discute el tema, la columna de El Mercurio así da cuenta el tema, pero ponía en duda si acaso eso era lo que debía decidir el tomar una u otra decisión. Tenía dudas.

Entonces, salgamos del tema penal, de la coyuntura, imagínense una reforma a la ley de tránsito, en materia infraccional, y se viera el procedimiento, y la cuestión fuera saber qué procedimiento permite recaudar más por concepto de multas. Pero eso es una consecuencia, si hay multas, eso es consecuencia de que se hizo justicia.

El tema apunta a que el Estado cumpla su rol sancionador. No le hacía sentido plantear otras cuestiones, pero quizás había argumentos a favor de ello.

Lo tercero. Le gustaría tener a la vista lo que se dijo en la reforma procesal penal Algo se tuvo que decir, esa reforma no fue de una semana a la otra, sino que se dieron el tiempo y hubo expertos que participaron, y convendría conocer por qué se continuó con el artículo 162 del Código Tributario. Pidió tener a la vista esa discusión.

Uno de los grandes argumentos que a su juicio se ha planteado es el tema de la especialidad, hasta qué punto debe considerarse o no. Lo que se observa en todo ámbito de cosas, es que los especialistas tomen las decisiones en sus materias, y ese es un principio tenido a la vista al crear los tribunales medioambientales y su institucionalidad, al igual que al crear los tribunales tributarios y aduaneros, y en términos generales, es un elemento presente en cualquier debate al momento de discutir sobre aplicación de justicia.

**El diputado Monckeberg, don Cristián,** estimó que la indicación anunciada se hace cargo de una parte, el regular cuando el Ministerio Público puede ejercer acciones, o actuar, y plantean dos situaciones, si con motivo de la investigación de un delito común dan cuanta de un delito tributario, y agrega el tema de las personas jurídicas. Pero también habría que hacerse cargo de que ello sea revisable. Si el Ministerio Público pide, el Servicio puede negarse, y se requeriría que un tercero defina.

Por último, la cuestión era hacerse cargo de la discrecionalidad. Cuando el Ministerio Público solicita los antecedentes es un tema, pero también hay que buscar regular la discrecionalidad del Servicio, sigue siendo absolutamente discrecional. Debería avanzarse en ese tema. Frente a ello, ojalá dar un plazo, entre que va a la Sala y vuelve, aprovechar de convocar al Ejecutivo, académicos, para conocer bien sobre el tema.

**El diputado señor Rincón** estimó que había que hacerse cargo de resolver quien, en definitiva, se queda con la acción penal. El fondo estaba esbozado, incluso, respecto de cómo se enfrenta el tema para los contribuyentes menores, que no es un tema baladí.

**El diputado señor Gutiérrez** señaló que se ha dicho que acá hay un problema político, pero en realidad, no hay tal problema político, sino jurídico, porque la política impide la solución.

Acá estaban hablando del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, no estaban hablando de ningún monstruo. El Servicio tendrá que responder a ciertos criterios recaudatorios, pero acá hay un problema jurídico. Se están acá sacado cuentas por debajo de la mesa, y el tema es que el Ministerio Público pueda ejercer las acciones pertinentes cuando el Servicio no actúe.

Se está dramatizando porque hay elementos extras, pero no son extras, acá son parte, es la política. Acá le decimos al señor Director del Servicio que puede seguir haciendo lo que está haciendo, y eso no le parecía, a esa discrecionalidad le parecía un poco extraña, es como si el Estado le dice al contribuyente 'si no me pagas, te voy a denunciar', una labor extorsiva del Estado de Chile.

Se plantea que el tema lo estamos disfrazando, y buscándole soluciones, pero acá hay un problema jurídico, y el tema es si el Ministerio Público puede o no perseguir todos los ilícitos penales que ocurren en la República de Chile. El Ministerio Público ha buscado salidas, hay procedimientos abreviados, acuerdos, actuará según el mérito del proceso.

Ahora, que estemos diciendo que hay que estudiarlo más, que esto es un tema discutible, que novedad que sea discutible, si acá se viene a discutir. Acá el diputado Saffirio citó a Tavolari, uno de los gestores del Código Procesal Penal, a Piedrabuena quizá de donde haya que sacarlo para traerlo a exponer acá, pero este es un problema jurídico.

Aquí hay un ente que le interesaba sobremanera resguardar, pues el Ministerio Público es un gran logro de nuestro estado de derecho, y confiaba en su imparcialidad. Acá lo único que se hace es desacreditarlo, como que algo malo va a hacer, así es la sensación que a uno le queda, que el Ministerio Público quiere las acciones para perseguirnos a nosotros, pero ese criterio no es correcto.

**El diputado señor Chahin (Presidente)** consultó si a su parecer habría que modificar el artículo correspondiente de la Ordenanza de Aduanas, que permite a ese Servicio incluso la denomina compra de la acción penal.

**El Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott**, señaló<sup>3</sup> que sobre la titularidad en la acción penal en delitos tributarios, desde 1960 se mantiene la titularidad en el Servicio de Impuestos Internos. Durante la reforma procesal penal hubo una discusión, y ya en aquella época hubo discrepancia entre los ministerios de Hacienda y de Justicia. El ex director Etcheverry estuvo por mantener la facultad en el Servicio, pero Rafael Blanco estimó que el ejercicio de la acción penal correspondía al Ministerio Público.

<sup>3</sup> Disponible en <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=102740&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>.

Al respecto, cabía recordar que ni el Código Procesal Penal ni las leyes adecuatorias tuvieron control de constitucionalidad, y en ese sentido, el ex Fiscal Nacional Piedrabuena estimó que el artículo 162 del Código Tributario es inconstitucional.

Así, acá no se agrega nada al Ministerio Público, y no se le quita nada al Servicio, pues también mantendría el ejercicio de querellarse. Así, no hay un problema de constitucionalidad.

A modo de rectificación a lo planteado por el diputado Squella, el principio de oportunidad tiene controles en su ejercicio, basta que la víctima se oponga, y el juez obliga a continuar con la investigación. Ahí tenemos control absoluto sobre nuestro actuar.

Asimismo, a lo planteado por el diputado Andrade, los resultados de los ejercicios de las acciones penales no tienen que ver con lo incentivos de carácter económico hacia los funcionarios.

Era claro que el impuesto es diferente a una multa y una pena. El impuesto tiene como fuente el deber ciudadano de aportar para el logro de los fines sociales, pero las penas y multas no hay títulos de cobro, sino que se reclaman ante un tribunal por ocurrir un hecho ilícito. Lo recaudatorio no tiene nada que ver con el ejercicio de la acción penal, al Servicio no se le inhibe la recaudación fiscal, y acá se está hablando de una acción penal, que tiene una finalidad diametralmente distinta.

El sistema penal no busca recaudar impuestos, no puede haber un sistema penal que busque recaudar impuestos. Acá se infringen normas de las cuales se deriva una pena, una sanción, acá no se está hablando de recaudación.

Si el debate se plantea por el tema de multas administrativas, pues se tiene la intención de que estoy instrumentalizando el reproche penal, la amenaza penal, ello es una cuestión que contradice cuestiones de derecho penal básico.

Se plantea que por qué cambiar, y la respuesta es porque la sociedad cambió, la ciudadanía exige mayor transparencia, los niveles de transparencia de los '60 no son los de hoy. Esto de tirar una boleta, ante los mayores estándares que se piden a todos los actores, públicos y al mercado, el Ministerio Público tiene una postura firme en el delito de colusión, pues ahí donde hay grandes infracciones que probablemente aun la Fiscalía Nacional Económica, aunque tenga grados de autonomía, requiere legitimidad en la persecución penal.

Cuando se detiene delitos de baja lesividad, podemos detener, pero aceptar que otros infractores de leyes penales, que infringen valores tan importantes como la propiedad o la recaudación tributaria, cuestiones que persiguen la distribución de la riqueza, ahí no hay reproche de ninguna naturaleza, y se exculpan estos delitos que quedan a la discrecionalidad de la autoridad del nivel central.

Había diferencias con las cifras planteadas por el Servicio en la sesión anterior. Desde el año 2008 en adelante, hay 225 denuncias o querellas, donde cabe destacar los de los artículos 97 a 114 del Código Tributario. El resultado de estas investigaciones, cuántos casos, porcentajes de casos han sido formalizados, el 41% ha sido formalizado, y en el 2% ha habido requerimiento, lo que significa que en 4 de cada 10 casos, ha habido formalización. Esa información se podría contrastar.

Del total de 225 casos, 122 casos se encuentran terminados, estos casos están contabilizados los del año 2016 y 2017, y cabe tener presente que los casos duran en promedio un año. Del total de casos vigente, el 13% está formalizado o requerido. De las 80 causas sin formalización, 72 ingresaron el 2016 y 2017. Del total de casos terminados, en el 64% fue formalizado.

Según el tipo de término, en 115 hubo una salida judicial, de las cuales el 63% corresponde a una sentencia condenatoria, según el siguiente esquema. En 20 casos, no hubo salidas judiciales.

Detalle Término Judicial	Total
ACUERDO REPARATORIO	5
SENTENCIA DEFINITIVA ABSOLUTORIA	6
SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA	72
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO	10
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO 240	8
SOBRESEIMIENTO TEMPORAL	7
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO	7

Del total de penas aplicadas, más del 70% es igual o superior al presidio menor en su grado medio.

Penas Aplicadas	Total
Presidio Mayor grado mínimo	4
Presidio Menor grado máximo	19
Presidio Menor grado medio	30
Presidio Menor grado mínimo	14
Prisión	4

Y en cuanto a las diligencias investigativas por caso, en el 37% se realizaron entre 6 y 20 diligencias.

Actividades	Total	Porcentaje
5 o Menos	142	57%
Entre 6 y 10	45	22%
Entre 11 y 20	30	15%
21 o más	8	3%
<b>Total general</b>	<b>225</b>	<b>100%</b>

Aquí se trata de una investigación compleja, y si se realiza en alianza natural, se mejoraría la calidad de la investigación para mejorar la investigación en post del reproche penal.

Se hacía cargo de la falta de especialización. El Ministerio Público no puede actuar solo, requiere al Servicio, es la alianza natural. Mañana firmarán un convenio con la Superintendencia de Valores y Seguros, en una asociatividad en post de un propósito común.

**El Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza**, expresó<sup>4</sup> respecto a los resultados, que han tenido que hacer estas estadísticas de acuerdo a sus propias informaciones, por lo que era interesante poder contrastarla.

Pareciera que se confirma el hecho que en muchos de los casos en que se acciona, la vía de la sanción pecuniaria resulta más económica y efectivo como pena. Las multas de los tribunales tributarios y aduaneros son también sanciones, son penas, y en tal sentido, una condena, pero las salidas alternativas de la vía penal, las suspensiones condicionales a veces ni siquiera significan una condena, son cuestiones que se pueden contrastar.

Se estaba por la eficiencia y eficacia de la administración tributaria en los delitos tributarios. Para hacerlo breve, aprovecharía aclarar algunos juicios errados que se han vertido por parte de algunos de los intervinientes, tanto en la sesión anterior como la actual.

La primera, sobre el alcance del dictamen de la Contraloría, que aquí recurrentemente se ha usado para fundar la aprobación de la moción. El dictamen no se refiere en absoluto a las últimas decisiones del Servicio, era cuestión de leer el dictamen, el que se refiere a situaciones en que los casos prescriban, y sobre eso se piden acciones al Servicio. Incluso el mismo dictamen validó la estrategia judicial del Servicio, había que leer bien el dictamen para entender el sentido de ese documento.

El otro tema, sobre que la Corte Suprema estaría apoyando esta moción. Eso no es así, hace algunos días el vocero de la Corte Suprema, a título personal, plantea que sería necesario legislar en el tema.

Incluso, el día 18 de abril, consultado el Presidente de la Corte Suprema, sobre el hecho que en el Servicio podría haber existido impunidad, estimó que no, pues el sistema tributario también contempla sanciones, pecuniarias, y esa es una forma de sanción.

Había que aclarar las opiniones dadas por la Contraloría y la Corte Suprema.

Luego, algo que se cuestionó la sesión pasada, sobre que al Servicio le corresponde fiscalizar y no recaudar. La administración tributaria chilena se compone de la Tesorería General de la República, el Servicio Nacional de Aduanas, y el Servicio de Impuestos Internos, pero en su conjunto tienen un rol recaudador. Se fiscaliza para que se paguen los impuestos debidos. Es importante aclarar que el Servicio, al igual que los otros órganos que participan, sí tiene roles

---

4 Disponible en <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=102731&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>.

recaudadores, y por lo tanto, cabía considerar que cuando se establece que nosotros de alguna manera impedimos que el Ministerio Público pueda seguir investigando, quería señalar, que el Ministerio Público perfectamente puede seguir investigando los delitos conexos a los delitos tributarios. El Servicio solo se mete en los temas tributarios, pero de los delitos conexos perfectamente puede seguir investigando la fiscalía.

El Ministerio Público ha investigado delitos de cohecho, o negociación incompatible sin necesidad de querrela del Servicio, y está bien que sea así.

Había muchas confusiones que aclarar.

Se ha señalado que lo que se busca es la igualdad ante la ley, pero quiere plantear que es importante precisar cuando se hablaba cuando se hablaba de igualdad ante la ley. No podían estar contra ese principio, pero había que precisar, que tal como la Constitución Política dispone, no implica una igualdad aritmética, que sería querellas para todos, o ninguno. La igualdad consiste en tratar igual a lo que están en la misma situación.

Al sancionar a quienes cometen infracciones, tanto en las acciones administrativas como infraccionales y penales, se vela por el principio de igualdad, pues se distingue razonablemente entre quienes se encuentran en situaciones distintas, si acaso hubo auto denuncia, reiteración, montos involucrados, etc.

Por último, es necesario plantear que las aspiraciones de otra índole, razonables y legítimas, las aspiraciones de persecución del uso irregular de las campañas políticas, o la aspiración de perseguir adecuadamente delitos de cohecho, toda la ciudadanía anhela que eso se persiga, pero cabía hacer un llamado de atención a toda la ciudadanía, y era que a través de la norma tributaria, y a través de un Servicio como el nuestro, técnico, riguroso, no era razonable, no le hacía bien a la institucionalidad, que muchas otros delitos o faltas, como aquí se ha señalado, pretendan ser resueltos usando la norma tributaria, usando un servicio centenario, que ha prestado sus servicios al país, para fines que no le son propios.

## **2.- Acuerdos adoptados.**

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento acordó, por 8 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, proponer a la Sala se apruebe la idea de legislar del proyecto de ley en informe, rechazando lo recomendado por la Comisión de Hacienda. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Rincón, don Ricardo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Ward, don Felipe. Se abstuvieron los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

En ese sentido, y al no ser objeto de indicaciones se dio por aprobado con la misma votación, el texto del artículo único, propuesto en la moción.

**III.- MODIFICACIONES O ENMIENDAS PROPUESTAS AL TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.**

No hay modificaciones o enmiendas en tal sentido.

**IV.- INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.**

No hay indicaciones en tal sentido.

**V.- TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.**

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

“PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Modifícase el artículo 162 del decreto ley N° 830, de 1974, Código Tributario, de la siguiente manera:

- a) En el inciso primero elimínase la palabra “sólo”.
- b) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo:

“El Ministerio Público podrá investigar y ejercer la acción pública por los delitos tributarios de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones que realizare.”.

- c) Elimínase el inciso sexto.


- d) Sustitúyese el inciso séptimo por el siguiente:

“El Servicio de Impuestos Internos podrá solicitar los antecedentes respecto a delitos tributarios al fiscal que tuviere a cargo la investigación, con la sola finalidad de decidir si ejercerá las atribuciones que le otorga el inciso primero del presente artículo.”.

\*\*\*\*\*

Tratado y acordado en sesiones de 3 y 9 de mayo de 2017, con la asistencia de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny y Turre, doña Marisol y de los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad (Presidente); Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Rincón, don Ricardo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo; Trisotti, don Renzo y Ward, don Felipe.

Sala de la Comisión, a 9 de mayo de 2017.



**JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA**  
Abogado Secretario de la Comisión